

CRONICA DEL MES AGOSTO

Ernesto Cruz Alfaro

Como ocurriera durante los meses previos de junio y julio, el desarrollo del proceso político salvadoreño durante el mes de agosto estuvo nuevamente sobredeterminado por la dinámica del proceso de diálogo; concretamente, por los preparativos para la implementación de la tercera ronda.

El 2 de agosto, el FDR-FDR entregó a Monseñor Rivera su respuesta a la propuesta gubernamental que el arzobispo llevó a Morazán el 31 de julio. En ella, los Frentes planteaban que el encuentro tuviera lugar en San Salvador, previa integración de una comisión mixta que resolviera antes del 20 de septiembre la fecha, agenda y aspectos logísticos y de seguridad de la reunión. Trasladada esta propuesta por el arzobispo al presidente Duarte, éste formuló una nueva contrapropuesta que Monseñor Rivera transmitió telefónicamente a los Frentes el 4. En la contrapropuesta, Duarte reiteraba el 29 de agosto como fecha para tener el tercer encuentro, y la catedral de San Miguel como primera alternativa de sede, a la cual añadía como sedes alternativas San Francisco Gotera o Berlín; asimismo, proponía una ronda de conversaciones preparatorias, a celebrarse entre el 19 de agosto en la embajada salvadoreña en México. A su vez, los Frentes emitieron el 7 de agosto una declaración oficial en la cual aceptaban la ronda de conversaciones previas, las cuales sugerían realizar el 20

de agosto, mientras que la fecha del tercer encuentro se fijaría en las reuniones preparatorias en base a lo que se acordara en materia de procedimientos y seguridad.

Tras la aceptación tácita de Duarte, finalmente las delegaciones del gobierno y del FDR-FMLN iniciaron el 20, en la capital mexicana, la primera ronda preparatoria para el tercer encuentro de diálogo. Las pláticas, cuyo desarrollo estuvo plagado de momentos difíciles que sólo pudieron superarse merced al oportuno papel mediador de Monseñor Rivera, concluyeron el 22, con un comunicado de 6 puntos en el cual se anunciaba que la tercera ronda se tendría el 19 de septiembre en la localidad de Sesori (San Miguel). El encuentro estaría precedido de una nueva ronda preparatoria, a celebrarse en la primera quincena de septiembre, para resolver los puntos pendientes relativos a la movilización y seguridad de las delegaciones y a la participación de otros sectores en el proceso. El FMLN aprovechó también la presencia de Monseñor Rivera en México para gestionar la propuesta de canje formulada el 23 de julio para liberar al coronel Omar Napoleón Avalos. Las gestiones en tal sentido corrieron a cargo de Mario López y de Salvador Samayoa, a quienes el arzobispo entregó una lista de 23 reos políticos que el gobierno estaba dispuesto a canjear por Avalos.

Los precarios acuerdos de México, no impidieron que el horizonte del diálogo empezara a llenarse nuevamente de nubarrones. Apenas se anunció que el tercer encuentro se tendría en Sesori, tropas del batallón Arce, al mando del teniente coronel Mauricio R. Staben —implicado en el “caso de los secuestros” en el mes de abril—, ocuparon la localidad cuando, según los habitantes de Sesori, el ejército no mantenía ahí guarnición permanente desde hacía varios meses. En el mismo marco, la derecha recrudesció sus acusaciones sobre la presunta inconstitucionalidad del proceso de diálogo, sobre todo luego que, en su homilía del 24, Monseñor Rosa recordara que el problema del diálogo debía plantarse no tanto según la letra, sino según el espíritu de la constitución, la cual reconocía en su artículo primero que “la persona humana es el centro y el fin de todas las instituciones del Estado.” Después de la homilía, el prelado había insinuado que si en determinado momento del proceso de diálogo la constitución se tornase un obstáculo para alcanzar la paz, debería reformársela.

Mientras el gobierno aparentaba disposición a reanudar el diálogo, la Fuerza Armada profundizó sus esfuerzos en favor del plan de guerra “Unidos para reconstruir.” El 21, el jefe del estado mayor, general Adolfo Blandón, se reunió en el auditorium de la Cámara de Comercio con aproximadamente 200 representantes de diversas organizaciones gremiales de la empresa privada, convocadas por ANEP, para explicarles los objetivos del plan y sondear las posibilidades de cooperación de los empresarios. En conjunto, la tibia respuesta del sector privado no satisfizo las expectativas de la Fuerza Armada, por más que el general Blandón admitiera que los canales de comunicación entre los sectores empresariales y la institución castrense no habían sido lo suficientemente fluidos en los últimos años, y sugiriera a los empresarios detallar los problemas que enfrentaban, para que el alto mando pudiera comunicarlos al ejecutivo. El 26, con resultados aún menos fructuosos, Blandón expuso el plan a más de 150 dirigentes laborales, a quienes previno contra la manipulación de sus organizaciones por parte del FDR-FMLN al tiempo que formuló votos para el acercamiento de los sectores laborales a la Fuerza Armada.

Además de evidenciar las escasas simpatías generadas por el plan entre los diversos sectores sociales, las presentaciones de Blandón sacaron a relucir las divisiones secundarias existentes entre

la derecha y el alto mando. Al comentar las críticas del jefe del estado mayor a las pugnas interpartidarias, el mayor D'Aubuisson (ARENA) señaló que “bien vale aquel dicho de ‘zapatero a tus zapatos.’ Que deje él de estar criticando a los políticos por que la Fuerza Armada tiene su función. Hay cuestiones que el ejército no está cumpliendo a cabalidad y en cuanto a la guerra hay mucho que hablar.” A su vez, Blandón replicó que D'Aubuisson “es un oficial del ejército en situación de retiro, que hoy se ha metido a político para andar hablando muchas cosas porque vive en un país libre.” En la polémica intervino también el ministro de defensa, quien, en alusión al refrán citado por D'Aubuisson, indicó: “Yo le digo lo mismo al mayor, que debería ser militar en vez de estar de político.”

Fuesen o no ciertos los reproches de D'Aubuisson a la conducción de la guerra, el curso de ésta en agosto no ofreció signos de que el conflicto empezara a desempantanarse en favor de la Fuerza Armada. El día 8, el FMLN atacó el cuartel de la defensa civil en San Bartolomé Perulapía (Cuscatlán); según fuentes castrenses, en el ataque resultaron heridos 6 paramilitares. El 11, unidades de la Brigada Rafael Arce Zablath (BRAZ) entablaron fuertes combates en las inmediaciones de Arambala (Morazán) con tropas del batallón Cacahuatique, del Destacamento Militar Número 4, con saldo de 2 soldados muertos y 3 guerrilleros heridos. El mismo día, otras unidades del FMLN atacaron las posiciones de la Guardia Nacional en Chinameca (San Miguel), con saldo de 3 guardias heridos y un civil muerto.

El día 13, la Fuerza Armada inició un nuevo operativo con 3 mil efectivos del Destacamento Militar Número 4 y de los batallones Atlacatl y de Paracaidistas al norte del río Torola. Las tropas del Atlacatl penetraron a la zona por el sector de Joateca, mientras que los efectivos del batallón de paracaidistas fueron desembarcados por 24 helicópteros, apoyados por una avioneta 0-2, un avión C-47 y dos aviones A-37, en las localidades de Nahuaterique y Las Trojas, ubicadas en los bolsones en disputa con Honduras. A 3 días de iniciado el operativo, unidades especiales de la BRAZ derribaron un helicóptero UH-1H en las cercanías de Arambala; en la caída del aparato murieron 2 pilotos y 2 artilleros. El general Blandón negó que la aeronave hubiese sido derribada y explicó que se había accidentado por “desperfectos mecánicos.” Al día siguiente, los restos del aparato fueron rescatados por efectivos de la

fuerza aérea de Estados Unidos estacionados en Honduras y trasladados a San Salvador a bordo de un helicóptero Chinook. Junto a la táctica de campos minados y acciones de pequeña envergadura, el FMLN enfrentó el operativo con un nuevo paro al transporte a nivel nacional, entre el 24 y 31 de agosto, con saldo, según COPREFA, de 6 vehículos destruidos, otros 12 dañados y 10 civiles heridos. A finales del mes, en el marco del operativo, la Fuerza Armada habría dado muerte a 9 insurgentes y herido a 18; desmantelado más de 30 campamentos y 20 tatús, incurionado en tres puestos de mando del FMLN, e incautado medio centenar de armas de diverso calibre. El FMLN, por su parte, aseguraba haber ocasionado 127 bajas a la Fuerza Armada, entre muertos y heridos.

En total, según COPREFA, en agosto el ejército dio muerte a 91 miembros del FMLN, hirió a 138 y capturó a 5 combatientes y 155 elementos de masa, mientras que 25 guerrilleros entregaron sus armas en diversas guarniciones del país. Asimismo, la Fuerza Armada habría decomisado 182 fusiles de diferente calibre, 2 carabinas M-1, 12 escopetas, una ametralladora M-60 y diverso material bélico.

Los esfuerzos gubernamentales en el terreno económico no fueron más fructuosos que los de la Fuerza Armada en el campo militar. El día 29, Duarte juramentó como nuevo ministro de economía a Ricardo Perdomo, hasta ese momento secretario privado de la presidencia, en sustitución de Ricardo González Camacho, quien pasó a ocupar la cartera de comercio exterior, en el marco de un recambio de gabinete tan estéril como los anteriores.

Al sabotaje guerrillero contra la infraestructura económica se vino a sumar el impacto de una severa sequía que, según informes del Ministerio de Agricultura y Ganaderías (MAG), habría afectado a unas 40 miles familias que subsistían principalmente del cultivo de granos básicos. Los daños más graves se produjeron en los departamentos de La Unión, San Miguel y Usulután, donde, según estimados del MAG, se podría haber perdido el 60 por ciento de la cosecha de granos. Pretextando la difícil coyuntura agrícola, la Comisión de Reactivación Económica de Oriente, integrada por el comisionado presidencial para la zona, los comandantes militares de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, y 5 representantes del sector privado de dichos departamentos, solicitó al ejecutivo la implementación

de un programa de líneas preferenciales de refinanciamiento por parte del Banco Central de Reserva (BCR). En respuesta a ello, el 8 de agosto Duarte ordenó la suspensión de las acciones legales contra los empresarios de la zona oriental con saldos insolutos, así como el refinanciamiento solicitado. En contrapartida, el mismo día que el mandatario comunicaba las concesiones a los productores de oriente, el presidente de la CEL anunció que, debido a la devaluación del colón y a los altos costos de materiales y repuestos para reparar los daños causados por el sabotaje del FMLN, la institución se vería forzada a incrementar entre un 20 y 25 por ciento las tarifas del servicio de energía eléctrica. Aunque los incrementos no se hicieron efectivos en ese momento, su sólo anuncio bastó para desatar una ola generalizada de protestas, tanto de parte de la iniciativa privada como de los sectores laborales.

Entre los acuerdos aprobados el 16 de agosto por la Cordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST), durante su asamblea general de delegados, figuró precisamente el rechazo al alza de las tarifas de la energía eléctrica, si bien como un punto secundario en relación a otras demandas menos "economicistas," como las exigencias de expulsar del país al Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL) y que la tercera ronda de diálogo se tuviera en San Salvador, con la participación de la UNTS como observadora.

En el marco de nuevas presiones reivindicativas por parte del movimiento laboral, el 19 de agosto la UPD, COACES y FENACITES manifestaron que, debido a la sequía que azotaba diversas zonas del país, no podrían pagar sus préstamos bancarios, al tiempo que demandaron del gobierno la concesión de créditos oportunos, rebaja de precios a insumos y fertilizantes, y revalorización de deudas, entre otras medidas, las cuales no encontraron en Duarte el mismo eco que 11 días antes habían hallado los empresarios de la zona oriental. No obstante, la indiferencia presidencial no desanimó los reclamos del movimiento cooperativo agrícola. El 27 de agosto, unos 7 mil cooperativistas marcharon en demanda de la disminución de los precios de los insumos agrícolas, la exención del pago de los créditos de avío por este año y la derogación de la deuda agraria.

Al día siguiente, en un eje paralelo de lucha reivindicativa, 5 mil trabajadores del ISSS iniciaron un paro de labores a nivel nacional en de-

manda de aumentos salariales, mejoras en las prestaciones sociales, reinstalación de trabajadores despedidos, suspensión de sanciones de descuento y el cese de la represión contra los sindicalistas en general. El 30, en solidaridad con el STISSS y en demanda de respuesta a sus propias reivindicaciones, se fueron también al paro de labores otros 7 sindicatos: el del IVU, la Policlínica, la Refinería de Azúcar, del café (SI-CAFE), la Federación Unitaria Sindical (FUSS) y los de 2 industrias avícolas.

El gobierno, descontrolado por la amplitud de la movilización laboral, no dio muestras de haber sacado alguna enseñanza de la experiencia pasada. El 20, agentes de la Policía Nacional vestidos de civil capturaron a Rodolfo Andrés Prieto, secretario general del sindicato de ANDA (SETA), lo cual no hizo sino generar un amplio movimiento de solidaridad sindical que obligó nuevamente a Duarte, como ocurriera con Fede Elizabeth Velásquez el mes anterior, a entregar al dirigente sindical a FENASTRAS, sólo que esta vez en casa presidencial.

Además de mostrar el escaso nivel de tolerancia gubernamental frente a las demandas de los trabajadores, la captura de Andrés Prieto evidenció también la persistencia de las violaciones a los derechos humanos, pese a los esfuerzos del gobierno para convencer de lo contrario a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país entre el 11 y 16 de agosto para investigar *in loco* la situación salvadoreña. A diferencia de ocasiones anteriores, la misión de la CIDH recibió esta vez de parte de autoridades civiles y militares "todas las facilidades" para hacer su labor, y logró entrevistarse con el presidente Duarte, la cancillería, la asamblea legislativa, la corte suprema de justicia y miembros del alto mando. Asimismo, visitó diversos centros penales y escuchó las opiniones de la Iglesia y de los organismos independientes de defensa de los derechos humanos. Aparentemente, la presencia de la misión motivó también al fiscal general a anunciar la reapertura del juicio contra 10 miembros de la defensa civil implicados en la masacre de Las Hojas, aunque no fue capaz de impedir que la asamblea legislativa prorrogara a partir del 12, por 30 días más, el estado de sitio.

Al igual que pretendiera granjearse la simpatía de la CIDH, el gobierno intentó, con mayor éxito, aprovechar la consagración episcopal de Monseñor José Carmen Di Pietro como

primer obispo de la diócesis de Sonsonate, el 16 de agosto, para estrechar los lazos de amistad con la jerarquía eclesiástica. La consagración, presidida por el Cardenal Obando, constituyó una apoteosis de anticomunismo a la cual concurren el vicepresidente Castillo Claramount, el embajador Corr, el estado mayor de la Fuerza Armada y numerosos funcionarios de gobierno. Durante el acto, aprovechando la presencia de una multitud estimada en 20 mil personas, una avioneta "Push and pull" de la fuerza aérea lanzó propaganda anticomunista, mientras soldados del cuartel de Sonsonate instaban con altoparlantes a luchar por la "democracia" y por la Iglesia católica nicaragüense, "víctima de los sandinistas," al tiempo que repartían volantes donde se calificaba a Monseñor Obando de "héroe de la sufrida Nicaragua" y hacían circular el libro anticomunista **El corazón del comunismo**. El día anterior, el Cardenal Obando había declarado a la prensa que los representantes de la Iglesia no debían participar en política partidista, aunque "sí deben participar en la política general en donde se denuncia lo malo."

En el ámbito de la política exterior salvadoreña, el mes de agosto apuntó a la profundización de los lazos de dependencia respecto de Estados Unidos. Los días 13 y 14, el general Vides Casanova efectuó una visita oficial a Washington, donde se entrevistó con funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado. Aunque, en conjunto, la visita transcurrió en medio de considerable hermetismo, el ministro de defensa aseguró a la prensa norteamericana que las nuevas tácticas de la Fuerza Armada salvadoreña, junto con una "mayor coordinación de las operaciones" y "mejores análisis de inteligencia," habrían generado "la dispersión de las fuerzas subversivas." Asimismo, aseveró que las filas del FMLN se habían diezclado considerablemente en los últimos 2 años, aunque matizó que "no me atrevo a aventurar cifras, porque puede crearse la impresión equivocada de que esa disminución de fuerzas suponga que no necesitamos contar con la ayuda militar de Estados Unidos." Por su parte, el presidente Duarte se apersonó el 21 de agosto en la asamblea legislativa para ratificar su solicitud de permiso por un año para viajar cuando lo juzgase conveniente a Centroamérica, Panamá y Estados Unidos. Duarte justificó la petición aduciendo que el congreso norteamericano había anunciado que reduciría en un 30 por ciento la asistencia económica y militar a sus aliados, lo cual representaría

para El Salvador 150 millones de dólares menos "que nos va a dejar en una situación económica gravísima, inclusive para poder sobrevivir." La solicitud fue aprobada finalmente por el PDC, PCN y PAISA, luego de que la fracción de ARENA abandonara el recinto legislativo en protesta por las conversaciones que el gobierno sostenía en México con el FDR-FMLN en ese momento.

Mientras tanto, la situación regional giró en torno a los esfuerzos latinoamericanos para relanzar la iniciativa de contadora, y a las maniobras norteamericanas para obstaculizar dichas gestiones de paz. El 8 de agosto, con ocasión de la asunción presidencial del nuevo mandatario colombiano, Virgilio Barco, los grupos de Contadora y de Apoyo sostuvieron en Bogotá una reunión para "renovar los esfuerzos de paz en Centroamérica, entendiendo que la negociación diplomática es el único camino para asegurar una solución estable y equitativa en la región." Cinco días más tarde, se reunió en Guatemala la comisión preparatoria del parlamento centroamericano, integrada por los vicepresidentes, cancilleres y tres diputados de cada país del área, para discutir, sobre un documento de trabajo elaborado por Guatemala, un proyecto de tratado del sistema parlamentario regional. En una línea formalmente distinta de negociaciones, pero en último término también coadyuvante a la distensión regional, entre el 18 y 19 de agosto se reunieron en Managua los ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales del istmo, con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), para implementar nuevos mecanismos de pago que agilizaran los intercambios comerciales regionales al margen de la Cámara de Compensación centroamericana. Entre otros frutos de la reunión, se aprobó el denominado Derecho de Importación Centroamericano (DICA) como mecanismo alternativo de pago interregional.

El gobierno de Reagan prosiguió su escalada intervencionista en la región, esta vez con mayor apoyo del congreso, luego de que el 13 de agosto el senado aprobara, por 53 votos contra 47, los 100 millones de dólares demandados afanosamente por el presidente en los meses precedentes para financiar los crímenes de "los contras." Envalentonado por la aprobación del senado, Reagan afirmó abiertamente el día 20 que "si el gobierno nicaragüense no llega a un acuerdo pacífico con los rebeldes, la única alternativa es que los combatientes por la libertad sigan el camino y tomen el poder." Los aliados centroamericanos de la administración norteamericana, sin embargo, aparentemente preocupados por las consecuencias que les pudiera acarrear su apoyo incondicional, intentaron desvincularse, al menos verbalmente, de los rumores que sostenían que "los contras" serían entrenados en territorio centroamericano. Las primeras reacciones provinieron del gobierno hondureño, cuyo canciller manifestó el 20 que "Honduras no permitirá que su territorio sea usado para hacer llegar ayuda a los antisandinistas;" una semana después, el propio Azcona Hoyo reafirmó que "no prestaremos nuestro territorio para desestabilizar o agredir a países vecinos." Análogamente, el ministro de seguridad de Costa Rica subrayó que su gobierno no permitiría el entrenamiento de antisandinistas en suelo costarricense "ni el paso de equipo bélico con destino a los contras." Amparado por ese clima de opinión, incluso el canciller salvadoreño se atrevió a decir que "por instrucciones expresas del presidente Duarte, ninguna parte del territorio nacional se prestará para que los antisandinistas se entrenen."

Al día siguiente de las declaraciones de Castillo Claramount, empero, el propio Duarte se vio traicionado por la postura de subordinación del gobierno salvadoreño a las directrices norteamericanas y, en el mismo tono empleado por Reagan para justificar el apoyo militar a los contras, afirmó que "la solución diplomática habría sido preferible, pero Nicaragua necesita una solución militar."